

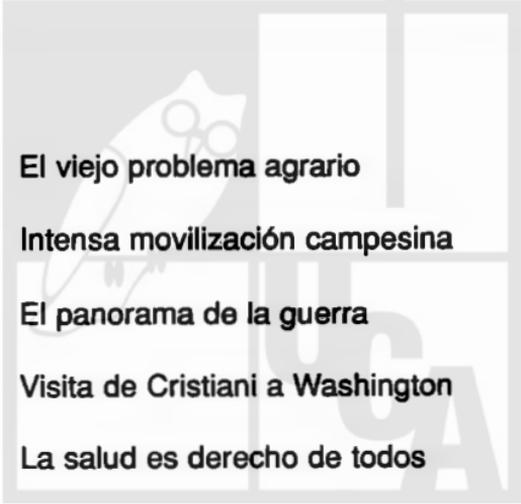
El Salvador proceso

informativo semanal

año 12
número 477

junio 12
1991
ISSN 0259-9864

centro universitario de documentación e información

- 
- El viejo problema agrario
 - Intensa movilización campesina
 - El panorama de la guerra
 - Visita de Cristiani a Washington
 - La salud es derecho de todos

El viejo problema agrario

La tierra ha sido y sigue siendo la principal fuente de riqueza nacional y, en la misma medida, la principal fuente de pobreza nacional. Sin duda, la pobreza en el campo, y la migración y marginación urbanas que ella genera, tienen su raíz en una injusta y antisocial tenencia de la tierra, aunque toda una conjugación de factores estructurales, económicos, sociales y culturales, hayan cimentado y agravado el problema. De ahí que no sea ninguna novedad el que la posesión de la tierra sea un permanente foco de conflicto social, del que desafortunadamente sólo se toma mala e interesada conciencia cuando aflora cíclicamente en la toma de parcelas o haciendas por campesinos empobrecidos y desposeídos.

Esto que ahora ha vuelto a cobrar vigencia en El Salvador no es privativo del país ni arbitrariedad del conflicto armado en que se vive, cuando fenómenos semejantes se producen a diario en América Latina y con singular agudeza y actualidad en Brasil. Por ello no deja de resultar sospechoso que en las esferas gubernamentales y militares se lo sitúe simplistamente dentro del ya abultado expediente de la agitación subversiva, al que van a dar, y en el que se intenta disolver y no resolver, todos los desajustes y conflictos sociales del país.

En teoría, también el gobierno ha aceptado la existencia de una extendida y extrema pobreza en el país, y no ha desaprovechado oportunidad para vestirse de humanismo afirmando que los pobres son los únicos privilegiados de su política económica. Aun en el caso específico de la toma de tierras, al sustentar la tesis de la manipulación campesina por parte de la subversión, el gobierno admite el hecho de la existencia de campesinos manipulados y manipulables por su miseria y abandono. Aun más, a su modo y con vistosos juegos propagandísticos, ARENA ha pretendido tener y dar la respuesta adecuada a la miseria en el campo, con la "consolidación" de la reforma agraria, los programas del ISTA, las parcelaciones de FINATA y un banco de tierras todavía en el papel. Sin embargo, no son el ISTA ni FINATA ni la secretaría de agricultura las primeras entidades que se presentan a conocer un problema de necesidad y toma de tierras, sino el juez y la Fuerza Armada.

No se trata de esperar y reclamar demagógicamente que FINATA o el ISTA tengan de inmediato la tierra y la solución idóneas para los campesinos sin tierra que recientemente ocuparon las propiedades ociosas, porque vasto y complicado es el problema. Pero tampoco es solución desterrarlos de ellas manu militari, bajo el pretexto mendaz de que esto se hace en cumplimiento de una misión constitucional, como ha dado en proclamar la Fuerza Armada. De hecho, tras este

simplismo legalista subyace la más expedita y tradicional forma de evacuar los problemas sociales y la miseria en El Salvador, explícitamente reivindicada por el diputado arenero Mario Valiente, al declarar que los campesinos "en alguna parte vivían antes de tomarse la tierra, allí que regresen".

Precisamente, lo que la toma de tierras ha puesto al descubierto no es el involucramiento subversivo en el problema del agro, sino la carencia total de una política agraria integral y el absoluto desinterés del gobierno en erradicar la pobreza en el campo. Antonio Cabrales, ministro de agricultura, ha ofrecido a la toma de tierras una alternativa más racional que la de su correligionario diputado, aunque a todas luces parcial e improvisada, recordando que en el oriente del país la propiedad cooperativa reformada posee unas 100 mil manzanas de tierra sin cultivar, en las que debería tener cabida este campesinado desterrado en su propia tierra.

No obstante, 100 mil manzanas apenas son fracción del 15 por ciento de la tierra cultivable del país afectada por la reforma agraria, extensión todavía del todo insuficiente para solucionar el ingente problema del campesinado salvadoreño. A sabiendas de la magnitud del problema, Cabrales ha debido admitir que aun cuando durante dos años han husmeado y criticado hasta el último cajón dejado por los demócratacristianos, no se han ocupado ni siquiera de iniciar el censo de todas las tierras que, excediendo el límite de extensión constitucional, deberían haber pasado hace tres años a manos campesinas.

Pobre e incoherente es también la explicación con que se niega a otorgar a los campesinos una estancia temporal en las tierras que ahora tienen tomadas y ya trabajadas, aduciendo defensa del derecho de la propiedad privada, y excusando la ociosidad en que han permanecido estas tierras en la falta de condiciones e incentivos para que los propietarios las hicieran producir. Primero, porque la misma explicación sería válida para la baja producción y productividad de la propiedad cooperativa creada por la reforma agraria, a la que el gobierno critica y se esfuerza en suprimir por improductiva. Pero sobre todo, para nadie que conserve un rescaldo de humanismo y sentido de justicia podría prevalecer ningún principio de propiedad sobre la vida y dignidad de cientos de miles de salvadoreños, de los más pobres entre los pobres.

Con demagogia y voluntad de engaño aún más evidentes, al cerrar su segundo año de gobierno Cristiani se ha congratulado de que su política agraria ha conseguido volver deficitaria la mano de obra en el campo. Si es así, ¿por qué no se conduce a los campesinos sin tierra a ese trabajo seguro y bien remunerado, lejos de condenarlos a ese lugar de miseria y anonimato de donde, a juicio de los diputados de ARENA, nunca debieron salir?

Al parecer, diez años de guerra no han calado todavía en la conciencia de los potentados económicos y militares del país.

Intensa movilización campesina

Llegado el segundo aniversario del gobierno de ARENA, las afirmaciones del Presidente Cristiani al rendir su informe de labores ante la Asamblea Legislativa el pasado 1 de junio, en el que afirmó que su gestión "cambió la estructura [de la sociedad salvadoreña] desde sus raíces" y que "la etapa más dura [del ajuste] ha pasado", parecen contrastar con la realidad, en una coyuntura en que se ha agravado el conflicto en torno al crónico y más antiguo problema estructural de la sociedad salvadoreña: la concentración de la propiedad de la tierra. Desde fines del pasado mes de febrero, se han realizado al menos 29 tomas de propiedades por parte de grupos de campesinos sin tierra, según lo han informado organizaciones campesinas como ANTA, ADC, y otras (Proceso 475).

Tal movilización campesina, sin precedentes en la conflictiva década de los 80's, ha vuelto a suscitar reveladoras reacciones de los sectores dominantes, y urgido a los campesinos, como en otras épocas, a enfrentar los embates de los poderosos propietarios, y sus aliados políticos y militares. Ante las tomas iniciadas el pasado 25 de febrero con la ocupación de la hacienda Amulunga, en Ahuachapán, las organizaciones campesinas protagonistas de tal movilización han expresado reiteradamente su disposición a mantenerse en las tierras ocupadas, y a realizar nuevas tomas mientras el gobierno no acepte discutir y concertar una solución definitiva al problema agrario.

En esta línea, el pasado 30 de mayo la Alianza Democrática Campesina (ADC) publicó su propuesta "para garantizar el derecho de los campesinos a la tenencia de la tierra", que envió el 23 de mayo a la mesa de negociación en Venezuela. La propuesta

incluye siete considerandos en torno al problema nacional de "la concentración de tierras en pocas manos". Asimismo, reitera que "la carencia de tierra para muchos campesinos, la necesidad de sobrevivencia de la población, la existencia de tierras baldías y la negligencia del actual gobierno en la compra de tierras afectadas, ha propiciado la ocupación de tierras por parte de cooperativas y comunidades campesinas"; y sugiere nueve medidas de política agraria que buscan resolver el problema actual de las tierras ocupadas, garantizar la continuidad y efectividad del proceso de reforma agraria, así como derogar las nuevas leyes que lo afectan. Pese a que dicha propuesta ha sido también publicada en los medios de prensa locales, no parece haber encontrado eco en las autoridades gubernamentales, quienes siguen enfrentando el problema desde marcos legalistas y con los mismos métodos violentos y militaristas del pasado.

El gran capital ha instado insistentemente a adoptar este tipo de posturas. El 20 de mayo, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) formuló un vehemente llamado al gobierno para que hiciera valer las leyes que garantizan la propiedad privada, a lo cual el gobierno —olvidando la función social de la propiedad, que también garantiza la misma ley— ha respondido, a través del Presidente Cristiani, el vicepresidente Merino, el presidente de FINATA y otros funcionarios gubernamentales, que efectivamente harán "prevalecer la ley", y si las tierras tomadas no son voluntariamente abandonadas por los ocupantes, éstos han de ser desalojados por la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad. De hecho, ya las haciendas San Francisco de Asís, Amulunga y La Magdalena, en Santa Ana, así

como El Sitio, en Sonsonate, han sido violentamente desalojados por efectivos militares, y gran parte de sus ocupantes consignados a los tribunales respectivos bajo cargo de "usurpación de tierras".

Tras la actual movilización campesina, el gobierno ha vuelto a ver danzar el fantasma del FMLN, el cual estaría instigando a los campesinos a las tomas de tierras para desestabilizar al país. A estas acusaciones, la UNOC, al igual lo hicieron ANTA, ADC y otras organizaciones semanas antes, respondió el 29 de mayo que "el gobierno debe ser más responsable ante esta problemática y en lugar de amenazar con reprimir a los campesinos tiene que solucionar la situación que éstos viven".

En el debate en torno al grave problema agrario ha participado también la Iglesia Católica. El obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, afirmó el 25 de mayo: "Sabemos que tales tomas son ilegales; de eso no cabe duda, pero el problema va más allá de eso en El Salvador. Aquí hay injusticia en la distribución de la tierra, hay hambre y otros factores que no permiten sólo ver el caso desde el punto de vista legal".

El caso de Amulunga

Paradigmático de lo que está ocurriendo con las tomas de tierras, se ha vuelto el caso de la hacienda Amulunga. El 4 de junio, unos 200 campesinos ocupantes de Amulunga desde meses atrás fueron desalojados por un contingente militar combinado de la Policía de Hacienda, Policía Nacional, Guardia Nacional y Segunda Brigada de Infantería.

Los efectivos de la Policía Nacional, para realizar el desalojo, obligaron a motoristas de camiones de carga pesada a realizar los traslados de los campesinos, según lo reportó el Diario Latino. Irónicamente, un oficial que participó en la operación indicó que los efectivos se dedicaron a "hacer con-

ciencia" en los campesinos sobre la orden de desalojo dictada por el juez correspondiente. No obstante, el 3 de junio, el COPREFA informó que la Policía de Hacienda retiró ese día la seguridad que prestaba a las autoridades judiciales encargadas de ejecutar el desalojo del inmueble, ante la hostilidad de los campesinos ocupantes quienes, según el reporte militar, "habían sido previamente preparados para resistir el desalojo de las tierras que han usurpado en contravención de las leyes", datos que sugieren que el desalojo no fue tan pacífico como luego informó aquel oficial. De hecho, la dirigente de la UNTS, Rosario Acosta, denunció a la prensa que los campesinos recibieron amenazas a muerte de parte de los efectivos militares.

El 12 de junio, la ADC denunció que, ese día, 400 campesinos que se dirigían en una caravana a retomar la hacienda Amulunga, fueron interceptados violentamente por agentes de la Policía Nacional, a la altura del kilómetro 60 de la autopista a Santa Ana. Los motoristas de los buses en que se conducían los campesinos fueron despojados de sus documentos personales y las llaves de sus vehículos, según la denuncia. La respuesta de los campesinos, según Marcos Salazar, de la ADC, fue ocupar la calle como un acto de protesta, a lo que los agentes policiales respondieron con disparos, hiriendo a dos campesinos.

El 31 de mayo, un grupo de campesinos inició en la iglesia de El Rosario una huelga de hambre en protesta contra la política adoptada por el gobierno ante las tomas de tierras. A ellos se han unido familias campesinas desalojadas de las haciendas El Sitio, San Francisco y Amulunga.

El actual conflicto en el agro representa un problema social que va más allá de las pretendidas manipulaciones de masas atribuidas al FMLN. El gobierno debería percatarse de ello antes de que el conflicto cobre nuevos vuelos de confrontación y violencia social.

DATOS DE TIERRAS EN CONFLICTO

Nombre de Propiedad	Nº MZS	Estado de la Propiedad	Nº de familias asentadas	Nombre de la Cooperativa	Ubicación Geográfica
1. Tamambo	550	Ocupada	355	El Remolino	Texistepeque, Sta. Ana
2. La Cabodilla	1300	Se negocia en FINATA	85	—	Nva. Concepción Chilate
3. Chilcuyo	300	Se negocia en FINATA	—	La Navoehía	Santa Ana
4. Los Limones	33	Ocupada en 1950	36	El Chimaltán	Coatepeque, Sta. Ana
5. El Pasturo	500	No vendien	62	—	Cuscatlán
6. El Mercedes	200	Negocia con FINATA	62	Nvo. Renacimiento	Nva. Concepción, Chilate
7. Lindero	127	Ocupada en 1980	80	Limora	Beñín, Usulután
8. Los Merandi	166	Ocupada	62	—	Beñín, Usulután
9. La Esmeralda	110	Ocupada	60	—	Beñín, Usulután
10. La Florida	—	Ocupada en 1982	—	La Florida	Zaragoza, La Libertad
11. San Fco. de Asís	400	8 años abandonada desalojada	70	—	Ahuachapán
12. Amulunga	300	Proceso de embargo	80	—	Ahuachapán
13. El Silo	350	Ocupada, desalojada	70	—	Nahuzelec, Sonsonate
14. San José Arrazola	130	Tierras arrendadas	150	—	Apopa, San Salvador
15. Santa Lucía	90	Ocupada	50	—	Tacuba, Ahuechupán
16. Santa Lucía	112	Abandonada	25	—	Zacatecoluca, La Paz
17. Guadalupe	126	—	50	Las Virudea	Tacuba, Ahuechupán
18. Joya del Pilar	66	Ocupada	45	—	Sn. Fco. Javier, Usulután
19. Hicoinea	125	Ocupada	35	—	Sn. Fco. Javier, Usulután
20. Zungaro	175	Ocupada	45	—	Sn. Fco. Javier, Usulután
21. La Peña	70	Ocupada	70	—	Sn. Fco. Javier, Usulután
22. Evangelizal	40	Ocupada	100	—	Ozama, Usulután
23. El Yalmo	50	Ocupada	30	—	Ozama, Usulután
24. La Blanca	70	Ocupada	30	—	Ozama, Usulután
25. Hda. La Caridad	510	Ocupada	130	—	Sn. Buenaventura, Usulután
26. Hda. La California	3000	Ocupada	300	—	Tierra Blanca, Usulután
27. La Veranera	182	Prop. del MAG	50	—	Sn. Juan Normal, La Paz
28. Santa Fe	106	Ocupada 1978	60	Desperiar Camp.	Ilobasco, Cabañas
29. El Triunfo	500	Ocupada 1990	24	—	Jucuarán, Usulután
30. La Pragua	5,000	Ocupada 1990	55	San Carlos	Zacatecoluca
31. La Magdalena	447	Ocupada 1980 prop. BFA.	70	Los Mungos	San Fco. Menéndez Ahuechupán
32. San José	93	Propiedad FINATA	43	—	Teocoluca, San Vicente
33. La Florida	570	37 fam. las trab. ofertada	37	—	Chalchuapa, Santa Ana
34. El Copo	170	Ocupada	70	—	Candelaria La Frontera, Sta. Ana
35. Ojos de Agua	583	Abandonada, ocupada	70	—	Tamanique, La Libertad
36. El Reflempago	50	Ocupada	28	—	Imingo, San Salvador
37. Solimar	35	Ocupada	15	—	El Triunfo, San Miguel
38. Apulo	40	Ocupada, prop. ISTU	100	—	Jucuarán, Usulután
39. Llano del Coyol	—	Abandonada, ocupada	—	—	Sonsonate
40. El Copita	26	Prop. FINATA	28	—	Beñín, Usulután
41. El Cerrito	—	Abandonada, ocupada	—	—	Sonsonate
42. Las Lomas	—	Ocupada 1988	—	—	San Martín Cuscatlán
43. Las Bermudas	200	Prop. Coop. Los Mungos	45	—	—
		Deuda con BFA.			
Totales	17,276		2782		

Fuente: ALIANZA DEMOCRATICA CAMPESINA

El panorama de la guerra

Las perspectivas sobre el logro de avances sustantivos dentro del proceso negociador continúan siendo inciertas. Los escasos resultados de la última ronda negociadora han provocado una escalada en la confrontación verbal y un endurecimiento de las posturas de ambas partes. Tanto el FMLN como el gobierno se han amenazado mutuamente con poner en marcha un sobreesfuerzo bélico para ablandar la posición del contrario. Entretanto, el involucramiento norteamericano en el conflicto —tan determinante en la prolongación de la guerra por más de una década— atraviesa por una nueva fase de discusión y redefinición. Los acuerdos particulares de tal revisión pueden, obviamente, favorecer o entorpecer todavía más la marcha de la dinámica de pacificación.

La ayuda militar norteamericana sobre el tapete de deliberación

El escaso avance del proceso negociador encuentra su explicación radical en la dificultad objetiva que supone la reestructuración y depuración de la Fuerza Armada. El ejército salvadoreño es, de hecho, la institución que virtualmente monopoliza el control del aparato estatal e impone estrechos límites al rango de acción del Presidente Cristiani y de su comisión negociadora. Un importante sector del Congreso norteamericano, sin embargo, intenta utilizar la asistencia militar como un factor potenciador del avance real en el proceso de pacificación.

De esta manera, el 6 de junio, la Cámara de Representantes aprobó, en el marco de la discusión del anteproyecto de ley de Asistencia Extranjera para el año fiscal de 1992, aplazar hasta septiembre próximo cualquier debate en torno a dicha cuestión.

La Casa Blanca ha solicitado 308 millones de dólares en ayuda para el gobierno salvadoreño, de los cuales 85 millones estarían destinados a la Fuerza Armada. Al mismo tiempo, un grupo de prominentes legisladores solicitó al Presidente Bush que no desembolsara los fondos retenidos durante el presente ejercicio fiscal —42.5 millones de dólares—, así como tampoco recurriera a un fondo considerable —de aproximadamente 90 millones de dólares— de asistencia militar otorgada en períodos anteriores y que hasta la fecha no ha sido desembolsado (Proceso 476). "El descongelamiento de estos fondos —afirmaron los congresistas en la misiva enviada a Bush— quitaría la presión sobre el gobierno con respecto a las negociaciones y el caso jesuita, y con respecto a los derechos humanos en general".

Con ambas medidas, los legisladores norteamericanos han intentado contribuir a una salida pronta y negociada del conflicto salvadoreño. "Creo que nuestra moratoria temporal sobre cualquier acción en torno a este asunto contribuirá a mantener la presión tanto sobre el FMLN como sobre el gobierno de El Salvador para que negocien seriamente el fin de la guerra", afirmó en este sentido el congresista Joe Moakley. De hecho, tanto el ejército como el FMLN tienen clara conciencia del impacto de la asistencia militar sobre el curso del conflicto y sobre su solución por medios políticos. El Ministro de Defensa, general René Emilio Ponce, indicó que "el Congreso norteamericano debería analizar muy seriamente los resultados que una decisión podría tener en el futuro de la pacificación del país...dentro del FMLN hay elementos que piensan que la vía violenta es todavía la solución para llegar al poder". Por su parte, el FMLN ha enfatizado que la asignación de más ayuda

resumen semanal

militar al país constituye "una grave provocación para la paz y es como lanzar una carga explosiva" sobre la mesa de negociación.

Dentro de este marco de acontecimientos, el Presidente Alfredo Cristiani emprendió el 11 de junio su segunda visita oficial a Washington, con el propósito de gestionar en los correspondientes círculos de decisión el descongelamiento de la asistencia militar retenida. Tal objetivo no fue conseguido, aunque no por ello puede afirmarse que Cristiani regresara a El Salvador con las manos vacías. Verbalmente, recibió del Presidente Bush un importante y decidido respaldo para que mantenga en el proceso negociador las posiciones que juzgue más acordes con sus intereses. También recibió la promesa de recibir en el corto plazo más ayuda militar si el FMLN incrementaba su accionar ofensivo. Queda ahora por ver la influencia de este respaldo en la marcha del proceso de pacificación.

Accionar bélico

La actividad militar durante la primera semana de junio arrojó un saldo de 23 combates de encuentro y 5 ataques rebeldes en 7 departamentos del país. En términos de desgaste de las fuerzas vivas contendientes, dicho accionar bélico ocasionó 18 bajas (7 muertos y 11 heridos) entre los efectivos de la Fuerza Armada y 23 bajas (18 muertos y 5 heridos) entre las filas del FMLN.

Los principales escenarios de la confrontación armada se localizaron en: Chalatenango, 8 combates de encuentro; San Vicente, 4 combates y un ataque rebelde; y Usulután, 5 combates. Otros departamentos en donde se registró, en menor escala, actividad militar, fueron: Cuscatlán, 2 combates; San Salvador, 2 combates y 3 ataques; Sonsonate, un ataque; Morazán y La Unión, un combate en cada uno. El ejército, además, aseguró haber desmantelado 7

campamentos rebeldes en los departamentos de San Vicente (4), Usulután (2) y Chalatenango (1), así como haber recuperado, en distintas acciones, 8 granadas para mortero 81 mm, 10 dispositivos detonantes eléctricos, 13 bloques de TNT, 2 lanzacohetes, 2 radios de comunicación y 3 fusiles.

A la luz de la dinámica militar reciente se constata, entonces, cómo el ejército continúa ejerciendo una fuerte presión en las áreas de predominio insurgente. La estrategia castrense parece apuntar hacia el confinamiento de las fuerzas guerrilleras en las zonas montañosas y despobladas de sus áreas de influencia y control. De hecho, el ejército está empeñado en un sobreesfuerzo militar en función de fortalecer las posturas gubernamentales en la mesa de negociación. Desde el punto de vista estrictamente operativo, ha utilizado con mayor discreción el apoyo aéreo —sobre todo de helicópteros— y, en cambio, ha recurrido a su superioridad numérica sobreesaturando con efectivos las áreas donde implementa los operativos de rastreo y desalojo.

El FMLN, en este mismo período, ha reducido su accionar ofensivo. No ha atacado guarniciones de importancia y, en términos comparativos, los comandos urbanos han mantenido un bajo perfil. Incluso ha reducido la intensidad de su accionar de sabotaje contra el sistema de distribución eléctrica; no se han registrado racionamientos en la primera semana del mes. Ello, por supuesto, no indica que las fuerzas rebeldes no estén en capacidad de intensificar la guerra urbana o de propinar golpes de importancia a unidades castrenses. Únicamente parece ser la expresión de la coyuntural decisión insurgente de defender sus posiciones consolidadas en las zonas de control. Obviamente, en el marco de una escalada de la confrontación, la guerra podría experimentar en el corto plazo un curso desfavorable a los esfuerzos por encontrarle una solución política.

Visita de Cristiani a Washington

El 11 de junio último, el Presidente Cristiani inició una visita oficial de trabajo de tres días a Washington, con el propósito declarado de exponer y discutir la situación salvadoreña con el Presidente Bush, sectores del Congreso y diversos círculos políticos y periodísticos norteamericanos.

La agenda de la visita fue bastante intensa. La tarde del día 11, tras su arribo a la base Andrews, al sureste de Washington, a bordo de un avión presidencial norteamericano que lo recogió en Miami, Cristiani fue recibido por el subsecretario de Estado, Lawrence Eagleburger, en las inmediaciones del monumento a George Washington, de donde se trasladó a "House Blair", residencia oficial en Washington de los jefes de Estado invitados por el gobierno norteamericano. Acá, el mandatario salvadoreño manifestó que "el tema predominante" de su visita era "la búsqueda de la paz en El Salvador". Indicó que la asistencia económica y militar de Estados Unidos al gobierno salvadoreño era solamente parte de su temario, y subrayó que "estamos empeñados en encontrar un cese al enfrentamiento armado lo antes posible".

Una hora después, Cristiani sostuvo una primera reunión de trabajo, en la propia casa Blair, con empresarios norteamericanos, quienes deseaban escuchar de él mismo las posibilidades de inversión actuales en El Salvador. Más tarde, cenó con varios congresistas interesados en el tema salvadoreño, entre ellos el senador de Connecticut, Christopher Dodd, partidario de congelar el 50 por ciento de la ayuda militar destinada a El Salvador en el próximo año fiscal.

La mañana del miércoles 12 la inició con un desayuno de trabajo con otros congresistas. Posteriormente, se dirigió a la Casa Blanca, para una entrevista con el Presidente Bush en la oficina oval. Al darle la bienvenida, Bush le manifestó: "Debo decirle que cuenta usted con nuestro respeto y apoyo total. Y no debe haber duda alguna de ello ni en este país ni en El Salvador ni en cualquier otra parte". Poco antes, agentes del servicio secreto habían detenido temporalmente a cinco miembros del Comité de Solidaridad con el pueblo salvadoreño (CISPES), quienes arrojaron dólares manchados con pintura roja al paso de la caravana de Cristiani.

ALLANAMIENTO: El sábado 08.06, el noticiero radial "Impacto Informativo" fue objeto de un allanamiento sin orden judicial, perpetrado por un contingente de efectivos policiales, tanto vestidos de civil como uniformados. Según lo denunció el periodista Antonio Fuentes Ibarra, director del noticiero, los agentes penetraron a la fuerza a las oficinas "como si fueran a capturar a un comandante rebelde", aduciendo que eran de antinarcóticos "pero en las oficinas de prensa no hay nada relacionado con narcóticos sino artículos o boletines para informar lo que acontece a diario". El incidente ocurrió apenas dos días después de que las oficinas de la agencia internacional de noticias ACAN-EFE fueran violentadas por un presunto "delincuente común", según dijeros efectivos de la Policía Nacional que fueron llamados para inspeccionar el lugar.

VILLALOBOS: El Ministro de Asuntos Exteriores de España, Francisco Antonio Fernández Ordóñez, recibió el 10.06, en Madrid, al comandante Joaquín Villalobos, para un intercambio de impresiones sobre la situación en El Salvador y el estado del proceso de diálogo entre el gobierno salvadoreño y el FMLN.

Tras dos horas de conversaciones entre ambos mandatarios, Bush inició una ronda de declaraciones a la prensa, en los jardines de la Casa Blanca. Una vez más, reafirmó a los periodistas: "No se confundan respecto al apoyo de esta administración al Presidente Cristiani. Es fuerte". Asimismo, exhortó al FMLN a volver a la mesa de negociaciones "y quedarse allí hasta que se llegue a un alto al fuego". También se desbordó en elogios sobre la personalidad de Cristiani y sobre los presuntos avances conseguidos bajo su gestión por la "democracia" en El Salvador. Aseguró que la sociedad salvadoreña "goza de libertad de expresión como nunca antes. Se ha mejorado el sistema judicial y también la autoridad judicial y policial. Y se ha comprometido a una reducción drástica de las Fuerzas Armadas y la profesión de los derechos humanos". No obstante, en el marco de los elogios, recordó a Cristiani que el caso de la masacre de la UCA seguía pendiente y lo comprometió a resolverlo: "Pronto se iniciará el juicio de los acusados de los asesinatos de los jesuitas en 1989 y sabemos que usted tomará las medidas necesarias para que se haga justicia en este despreciable crimen".

CRISTIANI: El 05.06, luego de juramentar al Consejo Nacional del Medio Ambiente, el Presidente Cristiani declaró a la prensa que "nosotros no queremos guerra, sino la paz, pero las concesiones que por este anhelo se hagan, no deben tomarse como un signo de debilidad, y que le quede bien claro al FMLN que si quiere guerra, guerra va a tener". Por otra parte, Cristiani reiteró que "la disolución de la Fuerza Armada no es negociable, y menos con el FMLN".

Por su parte, tras la entrevista, el secretario de Estado para asuntos interamericanos, Bernard Aronson, declaró que Cristiani, en contra de lo que algunos sectores de la prensa habían presumido cuando se informó sobre su visita, no solicitó a Bush el envío de los 42.5 millones de dólares de asistencia militar aprobada para este año pero todavía no desembolsada. No obstante, Aronson añadió que "obviamente no podemos permitir que el gobierno pierda su capacidad de defenderse en momentos en que los guerrilleros están intensificando la guerra".

COMITIVA: Según un comunicado difundido por la Secretaría Nacional de Comunicaciones (SENCO), la comitiva del Presidente Cristiani en su visita a Washington estará integrada por su esposa, Margarita Llach de Cristiani; el canciller Manuel Pacas Castro; el Ministro de la Presidencia, Dr. Oscar Santamaría; la Ministra de Planificación, Licda. Mirna Liévano de Marques; el Ministro de Economía, Ing. Arturo Zablah; el secretario privado de la Presidencia, Arturo Tona; el presidente de ANTEL, Lic. Saúl Suster; y el embajador salvadoreño en Washington, Miguel Angel Salaverría. El comunicado de SENCO no mencionó la presencia de ningún militar en la comitiva.

Luego de la entrevista en la oficina oval, y de la ronda con la prensa, Cristiani y Bush almorzaron en el salón Roosevelt de la Casa Blanca. A tempranas horas de la tarde, Cristiani se entrevistó por espacio de 45 minutos, en Blair House, con el secretario de defensa, Richard Cheney. Luego siguieron varias rondas de entrevistas con los medios televisivos y, por la noche, remató esa jornada con otra cena con miembros del Congreso. Para la mañana del jueves 13 estaba programado un encuentro con el vicepresidente Quayle y nuevas reuniones con la prensa, y luego el retorno a El Salvador.

Mucho se ha especulado sobre los verdaderos propósitos de la visita de Cristiani a Washington. Una cosa queda clara: ésta no puede desvincularse de la postura del gobierno en el proceso de negociación con el FMLN.

La salud es derecho de todos

Estaremos pagando el costo de la guerra de muchas formas y por muchos años. Una de las víctimas del conflicto armado en El Salvador ha sido el sistema público de salud. El Estado asumió responsabilidades en la Constitución y en varios tratados internacionales, para velar por la salud de la población salvadoreña. "Es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social," reza el Art. 1 de la Constitución. El Art. 65 dice: "La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación".

Empero, a pesar de los compromisos asumidos por el Estado para garantizar el derecho a la salud, se ha descuidado este derecho civil y la salud en El Salvador ha alcanzado niveles alarmantes de deterioro. La mayoría de la población salvadoreña se encuentra en precarias condiciones de salud, sin acceso a los servicios mínimos de atención de la salud, ni a los recursos económicos para buscar servicios particulares.

Ha sido mucho más que una cuestión de prioridades y decisiones políticas. Las asignaciones presupuestarias a la salud en El Salvador han sufrido cortes tremendos durante la última década, hasta llegar en 1991 a niveles menores de lo que era en 1979 (Ver Cuadro). El presupuesto para la salud en 1991 suma solamente 404.8 millones de colones, esto es, un promedio de 75 colones por persona y solamente 8.1 por ciento del presupuesto nacional. En 1979, la salud recibió 16.5 por ciento del presupuesto nacional. En cambio, las asignacio-

nes presupuestarias para la defensa y seguridad pública subieron de 14.2 por ciento del presupuesto de 1979, hasta 35.9 por ciento en 1986 y 22.8 por ciento en 1991. Estos montos de las asignaciones para la defensa no incluyen la ayuda militar extranjera, específicamente norteamericana; los recursos financieros disponibles para la guerra son actualmente mayores. Ha habido una clara decisión de priorizar la inversión para la "defensa" y "seguridad pública", para la guerra, sacrificando la salud y otros servicios sociales para la población.

Previsiblemente, las nuevas políticas gubernamentales de ajuste estructural empeorarán esta situación. Paralelo al sistema público de salud, ha crecido durante la última década un sistema de salud privado. Para las personas con recursos económicos, hay mayores y mejores servicios de salud disponibles, pero no para las mayorías populares.

Hemos comenzado a pagar las consecuencias. La tasa de mortalidad infantil en El Salvador, o sea el número de niños que mueren dentro de su primer año de vida, sigue siendo alta, en torno a 55 por cada mil niños nacidos vivos (en las zonas rurales, alcanza 88 por cada mil nacidos vivos). Las cifras sobre la desnutrición son alarmantes. Según el Banco Mundial, la desnutrición de niños menores de 5 años en El Salvador ahora sobrepasa el 50 por ciento, una tasa aun mayor que la de Haití (30 por ciento) y Honduras (35 por ciento)¹. Aproximadamente 30 por ciento de los niños menores de 5 años tiene retardo en el crecimiento físico, y hay áreas rurales con retardo de talla de entre 50 y 70 por ciento. Unos 300 mil niños salvadoreños muestran deficiencias de vitamina A. Estas cifras ubican a El Salvador como el país centroa-

mericano con más alta prevalencia de desnutrición?

Enfermedades que habían sido controladas, erradicadas o casi erradicadas en El Salvador, han comenzado a reaparecer y a ser transmitidas. Han surgido brotes epidémicos (por ejemplo, de dengue hemorrágico, tuberculosis, paludismo y sarampión) y aumentado los casos de enfermedades relacionadas con la desnutrición (por ejemplo, anemia entre las mujeres embarazadas). Según recientes declaraciones del Ministro de Salud, el número de casos de SIDA reportados en el país ha aumentado en un 30-33 por ciento.

Ya viene el cólera

Desde principios del año corre la noticia de que viene el cólera. El 20 de enero pasado, fueron confirmados los primeros casos de cólera en América Latina en este siglo, en una provincia del litoral peruano, Chimbote. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se especula que la enfermedad puede haberse introducido a través de desechos de barco contaminados, provenientes del Oriente, que pudieran haber contaminado a peces y mariscos que la población acostumbra comer crudos, o por contagio directo con personas procedentes de zonas endémicas. En menos de tres meses, se reportaron más de 1,400 muertos en Perú. Otras 160 mil personas fueron atacadas en los 23 departamentos del Perú, de las cuales unas 40 mil fueron hospitalizadas y tratadas. También se reportaron casos en Ecuador, Colombia y Brasil, y otros países sudamericanos se prepararon para la detección y tratamiento de la enfermedad.

Las organizaciones internacionales señalan que es inminente la llegada del cólera a El Salvador; difícilmente puede evitarse su introducción. Si tuviéramos mejores condiciones, la propagación de la

enfermedad, una vez que ha sido detectada, podría ser controlada. Tal es el caso de Estados Unidos. En los últimos cincuenta años, ha habido varios casos aislados del cólera reportados en dicho país, pero por el estricto control de la enfermedad, no se produjo una epidemia de magnitud. En cambio, Centroamérica sería altamente vulnerable. Según el director de la OPS, Carlyle Guerra de Macedo, el riesgo en la región es grande y "vemos con angustia y preocupación la imposibilidad de detenerla". Al ser preguntado sobre el cólera en El Salvador, el Ministro de Salud, coronel y Dr. Lisandro Vásquez, indicó, el 4 de junio último: "Esperamos en Dios que no lo tengamos".

Esta llamada "enfermedad de la pobreza" puede tener un impacto desastroso en El Salvador. Por ser una enfermedad infecciosa transmitida por heces y vómitos, por las aguas negras sin tratamiento, por el agua y alimentos contaminados, existen condiciones propicias para su transmisión y, a la vez, no existen las condiciones para el tratamiento de casos y el control de una epidemia.

Un 85 por ciento de las familias salvadoreñas vive en la pobreza, y 66 por ciento en la extrema pobreza; son las personas más susceptibles al cólera y, a la vez, las personas con menos posibilidades para obtener un tratamiento adecuado si son atacadas. Muchas de ellas viven en zonas rurales recónditas, inclusive en zonas conflictivas donde el acceso a medicinas, equipo, materiales y personal de salud está restringido por la Fuerza Armada.

Son las miserables condiciones de vida que la pobreza conlleva, sin agua potable, saneamiento ambiental, sistemas de eliminación de excretas, sin una dieta y nutrición adecuadas, y otros factores colaterales, lo que les hace susceptibles a la enfermedad. El 44 por ciento de las familias salvadoreñas no posee agua potable y el 43 por

El Salvador
Comparación de asignaciones presupuestarias
(millones de colones)

Año	Salud y Asistencia Social		Educación		Defensa y Seguridad Pública		Deuda Pública		Otros		Total
1979	147.6	16.5%	293.5	32.8%	127.3	14.2%	81.7	9.1%	243.4	27.2%	893.5
1980	171.2	15.2%	422.1	37.6%	179.2	16.0%	74.8	6.7%	275.7	24.6%	1,123.0
1981	178.8	12.7%	419.0	29.7%	299.5	21.3%	152.6	10.8%	358.8	25.5%	1,408.7
1982	179.2	12.7%	381.9	27.1%	368.6	26.1%	215.4	15.3%	266.3	18.9%	1,411.4
1983	178.7	12.1%	347.0	23.6%	393.3	26.7%	298.2	20.3%	255.2	17.3%	1,472.4
1984	200.2	12.4%	352.9	21.9%	635.6	33.2%	402.1	25.0%	120.7	7.5%	1,611.5
1985	197.5	10.5%	416.7	22.1%	674.6	35.8%	328.9	17.4%	267.3	14.2%	1,885.0
1986	186.9	9.0%	402.3	19.4%	744.6	35.9%	461.7	22.2%	280.6	13.5%	2,076.1
1987	287.1	10.5%	501.6	18.4%	894.1	32.8%	588.7	21.6%	455.6	16.7%	2,727.1
1988	288.9	10.4%	550.9	19.9%	987.0	35.6%	634.2	22.9%	311.6	11.2%	2,772.6
1989	299.0	8.1%	569.2	15.3%	992.5	26.7%	723.7	19.5%	1129.6	30.4%	3,714.0
1990	377.0	8.9%	707.9	16.6%	1117.9	27.7%	573.9	13.5%	1419.0	33.3%	4,255.7
1991	404.8	8.1%	755.9	15.2%	1135.6	22.8%	727.6	14.6%	1961.9	39.3%	4,985.9

Fuente: Ley General del Presupuesto

ciento no cuenta con adecuada eliminación de excretas³. En el área rural, se estima que el 90 por ciento de las familias no tiene agua potable y el 70 por ciento carece de letrinas u otro sistema para la eliminación de excretas. Las letrinas que existen están muchas veces mal ubicadas y demasiado cercanas a los pozos u otras fuentes de agua. La falta de agua conlleva un sinnúmero de problemas para la higiene.

En las zonas urbanas, no hay sistemas adecuados para el tratamiento de aguas negras, las aguas servidas, la basura, ni otros desperdicios. Ninguno de los 360 ríos del país es limpio y al Cerrón Grande entran las aguas sin tratar de los tres ríos más contaminados de El Salvador: los ríos Suquiapa, Sucio y Acelhuate. Todo esto a pesar de que es obligación del Estado brindar al menos los servicios mínimos indispensables, como la introducción del agua potable.

Muchos habitantes de El Salvador viven en casas de 1-2 cuartos, con hasta 12 personas por vivienda. La mitad de la población salvadoreña es menor de 15 años, vulnerable a las enfermedades infecciosas. Por ser un país con una alta densidad poblacional (240 habitantes por kilómetro cuadrado), fácilmente habrá puntos de contagio, y pasaría el cólera de una persona infectada a todo el grupo familiar y vecinal.

El estado nutricional de gran parte de la población la hace más susceptible a las enfermedades infecciosas. El 48 por ciento de los niños salvadoreños adolece de desnutrición crónica. Las diarreas, el parasitismo, etc., los debilitan y los hacen más susceptibles a otras enfermedades, por ejemplo, al cólera precisamente. Faltan controles adecuados de la calidad de los alimentos. Ni siquiera hay control del "agua cristal".

La probabilidad de transmisión infecciosa aumenta durante el período de transición

entre la estación seca y la estación lluviosa, y durante la misma estación lluviosa. En El Salvador, cada año se reporta mayor número de casos de diarrea durante estos períodos, que generalmente caen entre abril y octubre. La mayoría de casos de morbilidad y mortalidad infantil son causados por diarreas originadas por parásitos transmitidos por el agua. Se calcula que 25 de cada mil personas en El Salvador podrían contraer el cólera, o sea 2-3 personas de cada cien. Habría 600-700 casos diarios solamente en el área metropolitana de San Salvador, y hasta 1200 casos diarios en las regiones donde hay altos riesgos de contaminación, por ejemplo, las comunidades ubicadas en las desembocaduras de los ríos. Se puede llegar hasta unos 162,500 casos de personas infectadas con el cólera en pocos meses.

¿Qué suerte van a correr las personas atacadas por el cólera? Habida cuenta de las condiciones de vida de las mayorías populares, pobres, las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) en su campaña publicitaria de medidas preventivas, no confrontan la realidad. Sugerencias de hervir el agua antes de consumirla, el consumo de cierto tipo y forma de alimentos, y mantener buenos hábitos de higiene personal, no están dentro de las posibilidades de muchas familias. Es cuestionable si así se va a poder evitar la diseminación del cólera y una epidemia de grandes proporciones.

El MSPAS también aconseja a la población acudir al centro de salud más cercano si se presentan síntomas de la enfermedad. Hay 14 hospitales públicos en el país. El Hospital Rosales, el principal hospital público de El Salvador, tiene solamente 800 camas. El Hospital Bloom tendrá 400 al concluirse su reconstrucción. Hay un total de 46 hospitales en El Salvador, incluyendo a los privados, lo cual arroja un promedio de 121,739 pacientes por hospital conside-

rando una población de 5.6 millones de habitantes en el país⁴. Los hospitales estarán imposibilitados de atender los miles de casos de cólera que se podrían presentar en El Salvador.

De los 372 centros y puestos de salud del MSPAS, 34 todavía están cerrados a raíz de la guerra, el 25 por ciento de ellos en la región oriental del país. El 90 por ciento de los establecimientos públicos de la salud se concentra en las zonas urbanas. También la mayoría de los trabajadores del MSPAS están concentrados en áreas urbanas; hay un promedio de 4 médicos por cada 10 mil habitantes en el país, pero en zonas rurales se llega a situaciones de tener un médico por cada 50 mil habitantes. En áreas urbanas y rurales, ni los hospitales ni los puestos de salud tienen los medicamentos, equipo y personal suficientes para tratar a los pacientes que van a llegar.

Entre las personas que reciben un tratamiento rápido y adecuado, se calcula un 1 por ciento de mortalidad en estos casos, o sea 1 difunto por cada 100 personas infectadas. Pero, ¿qué pasaría a las personas que no reciben un tratamiento rápido y adecuado? Las personas que viven lejos de un centro de salud o de un hospital, o las personas que, aunque llegan a una dependencia del MSPAS, no son ingresadas y tratadas porque no hay cupo? Algunos médicos calculan que hasta un 50 por ciento de estas personas pueden morir.

¿Quiénes son los más vulnerables? Las personas viviendo en la pobreza o la extrema pobreza, por las razones arriba mencionadas. También los niños; se calcula que el 70 por ciento de los niños menores de 10 años afectados pueden morir. No es casual que el MSPAS ya esté organizando "equipos de enterradores" en La Libertad y otros sitios con alto riesgo de convertirse en focos de infección y epidemia.

Una epidemia del cólera tendría también

un impacto económico enorme. Por ejemplo, el comercio y, específicamente, la agroexportación, encontrarían los mercados internacionales cerrados a sus productos. La industria turística se evaporaría en una noche. Los mercados públicos, restaurantes y hasta vendedores ambulantes van a encontrarse sin clientes ni sostén de vida.

Una cuestión de prioridades y obligaciones

Si el cólera llega a proporciones epidémicas en El Salvador sería en parte porque los gobernantes no dieron mucha importancia a los mínimos servicios con que tenían que dotar a la población. ¿Cuál partido político ha tomado la salud como un deber del Estado y un derecho de la ciudadanía? ¿Cuál político se ha propuesto para una elección con una plataforma que incluya sistemas de agua potable y de eliminación de excretas?

Según datos de UNICEF, la introducción y saneamiento del agua potable tiene un costo de 240 colones (US\$ 30) por persona, y los gastos de mantenimiento son aproximadamente de 8 colones por persona al año. Ahora parece que no hay soluciones rápidas ni hay tiempo para corregir todos los errores de la última década. Varias organizaciones no gubernamentales (ONGs), comunidades e instituciones humanitarias están coordinando esfuerzos para prevenir una epidemia del cólera, pero ello no es suficiente. Nadie puede quedarse atrás.

El costo humano de una epidemia de cólera en El Salvador sería enorme, aun cuando es una enfermedad prevenible y tratable. Estaremos pagando un costo mayor porque el Estado ha considerado a lo largo de la última década que era más importante invertir en la guerra que en la vida (y la salud).

Hay que comenzar a redefinir las prioridades del Estado y las áreas donde hay

que colocar los recursos para el bien común. Sobre la clínica de salud en una comunidad en el noreste de Chalatenango está colgada una manta que dice: "La salud es derecho de todos". Ojalá que sea así.

- ¹ Caballero, Elsa L. **Las medidas de compensación social en Centroamérica**. Manuscrito no publicado. Abril de 1991.
- ² **Primer Censo Nacional de Talla de**

Escolares, 1988; Informe final: Evaluación de la situación alimentaria nutricional en El Salvador. (ESANES-88). Asociación Demográfica Salvadoreña (ADS), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP). San Salvador, Agosto de 1990.

- ³ **Ibid.**
- ⁴ **Inforpresa centroamericana**, N° 931, 25 de abril de 1991.

PRESENTACION

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significativos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y extranjeras, así como emeisiones radiales salvadoreñas e Internacionales.

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e Información de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".

SUSCRIPCION ANUAL

El Salvador	
personal	¢50.00
correo	¢60.00
Centroamérica y Panamá	\$25.00
Norte y Sur América	\$35.00
Europa	\$40.00
Otras regiones	\$45.00

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse a Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 240744 y 240011 Ext. 161 y 191.